

N/REF: 0057/2023

El proyecto remitido tiene por objeto introducir las modificaciones necesarias en el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva para adecuar su regulación a las modificaciones introducidas a través de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento de Empresas y a través de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Estas modificaciones pretenden introducir mejoras en el régimen jurídico de la inversión colectiva española para impulsar su competitividad y mejorar su funcionamiento y para realizar ajustes para adaptar la normativa española al Derecho de la Unión Europea. Además, este Real Decreto transpone los cambios normativos introducidos por Directiva Delegada (UE) 2021/1270 de la Comisión, de 21 de abril de 2021 por la que se modifica la Directiva 2010/43/UE en lo que atañe a los riesgos de sostenibilidad y los factores de sostenibilidad que deben tenerse en cuenta en relación con los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Por lo que se refiere a los tratamientos de datos de carácter personal debe tenerse presente la doctrina constitucional, recogida, entre otras, en las Sentencias 292/2000 y 76/2019, de acuerdo con la cual los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, y estableciendo las garantías adecuadas.

Por consiguiente, los aspectos esenciales que afecten a los tratamientos de datos de carácter personal deberán quedar recogidos en la norma legal, sin perjuicio de su ulterior desarrollo, dentro de los límites legales, por los correspondientes reglamentos, conforme a la doctrina constitucional anteriormente señalada.

En el presente caso, el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados se encuentra en la normativa legal citada, limitándose el presente proyecto de real decreto a su desarrollo sin que se aprecie, por parte de esta Agencia, extralimitaciones en dicho desarrollo o el establecimiento de nuevos tratamientos de datos personales que requerirían de norma con rango de ley, **por lo que se informa favorablemente.**